Señor,

JUZGADO ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ- Reparto.

E. S. D.

Referencia: Medio de Control de NULIDAD contra la **ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ** y la **SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ**.

Fernando Lancheros Beltrán, mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C., identificado con la Cédula de Ciudadanía número 79.456.486 , abogado portador de la tarjeta profesional número 67.762 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando como apoderado especial de **NELSON JULIAN VILLAMIZAR**, mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C., identificado con Cédula de Ciudadanía número 79.277.238, por medio de este escrito interpongo demanda para que se trámite **NULIDAD**, en ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 137 del C.A.P.A., contra el Decreto 131 del 29 marzo del 2017 expedido por la **ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ** y la **SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ**, conforme a las siguientes,

I. DECLARACIONES

PRIMERA.- Que se declare la nulidad del acto administrativo, Decreto 131 del 29 marzo del 2017, proferido por el señor Alcalde de Bogotá, **ENRIQUE PEÑALOSA LONDOÑO**, y el Secretario de Movilidad, **JUAN PABLO BOCAREJO SUESCÚN**, que disminuyó el número mensual de pasajes con subsidio de transporte asignados a favor de personas con discapacidad, fijadas en el Acuerdo Distrital 484 de 2011 y el artículo 8 del Decreto Distrital 429 del 2012, por haberse expedido mediante **FALSA MOTIVACIÓN**.

SEGUNDA.- Que se declare la nulidad del acto administrativo, Decreto 131 del 29 marzo del 2017, proferido por el señor Alcalde de Bogotá, **ENRIQUE PEÑALOSA LONDOÑO**, y el Secretario de Movilidad, **JUAN PABLO BOCAREJO SUESCÚN**, que disminuyó el número mensual de pasajes con subsidio de transporte asignados a favor de personas con discapacidad, fijadas en el Acuerdo Distrital 484 de 2011 y el artículo 8 del Decreto Distrital 429 del 2012, por haberse **EXPEDIDO SIN COMPETENCIA**.

TERCERO.- Que se declare la nulidad del acto administrativo, Decreto 131 del 29 marzo del 2017, proferido por el señor Alcalde de Bogotá, **ENRIQUE PEÑALOSA LONDOÑO**, y el Secretario de Movilidad, **JUAN PABLO BOCAREJO SUESCÚN**, que disminuyó el número mensual de pasajes con subsidio de transporte asignados a favor de personas con discapacidad, fijadas en el Acuerdo Distrital 484 de 2011 y el artículo 8 del Decreto Distrital 429 del 2012, por haberse **EXPEDIDO CON DESVIACIÓN DE LAS ATRIBUCIONES PROPIAS DE QUIEN LO PROFIRIÓ**.

CUARTA.- Una vez ejecutoriada la sentencia que le ponga fin a la presente acción, se comunique a la autoridad administrativa que profirió el acto, para los efectos legales consiguientes.

II. HECHOS

1. Que el **numeral 9 del artículo 3 Ley 105 de 1993**, determinó que "El gobierno Nacional, las Asambleas Departamentales y los Concejos Distritales y Municipales podrán establecer subsidios a favor de estudiantes, personas con discapacidad físicamente, de la tercer edad y atendidas por servicios de transporte indispensables, con tarifas fuera de su alcance económico. En estos casos, el pago de tales subsidios será asumido por la entidad que lo establece la cual debe estipular en el acto correspondiente la fuente presupuestal que lo financie y una forma de operación que garantice su efectividad. Los subsidios de la Nación sólo se podrán canalizar a través de transferencias presupuestales".

2. Que el Concejo de Bogotá en ejercicio de sus atribuciones legales, acordó mediante el **Acuerdo 484 del 2011**, crear un subsidio de transporte para el acceso de los habitantes del Distrito Capital con discapacidad permanente en el Sistema Integrado de Transporte Público.
3. Que de acuerdo con lo dispuesto en el **artículo 2 del Acuerdo 484 del 2011**, "La Administración Distrital dispondrá la operación del subsidio con base en un porcentaje de descuento sobre la tarifa al usuario del quince por ciento (15%), con un incremento anual de 5 puntos porcentuales, hasta llegar al 40 % y una asignación máxima de hasta cincuenta (50) viajes mensuales. La población beneficiaria de la tarifa será la registrada en las bases de datos de que dispone la Secretaría de Salud en cada vigencia. Se aplicarán como referencia los resultados de la encuesta para el Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales (SISBEN)".
4. Que de acuerdo con lo dispuesto en el **artículo 3 del Acuerdo 484 del 2011**, "La financiación del subsidio previsto en el presente Acuerdo, se efectuará con recursos del Presupuesto de la Administración Central del Distrito Capital".
5. Que el **Decreto Distrital 429 de 2012**, reglamentó el Acuerdo 484 del 2011 y determinó en su artículo 11, el procedimiento institucional para la operación del subsidio, así: "a. La Secretaría Distrital de Hacienda situará los recursos de cada bimestre del subsidio en Transmilenio S.A., correspondientes a una sexta parte del total presupuestado para cada vigencia fiscal".
6. Que mediante el **Decreto 131 de 29 de marzo del 2017**, expedido por Alcalde Mayor de Bogotá, **ENRIQUE PEÑALOSA LONDOÑO**, y el Secretario de Movilidad, **JUAN PABLO BOCAREJO SUESCÚN**, disminuyó el número mensual de pasajes con subsidio de transporte asignados a favor de personas con discapacidad, fijadas en el Acuerdo Distrital 484 de 2011, el cual será de 25 viajes, a los cuales se les aplicará el descuento establecido en el referido acuerdo.

III. NORMAS VIOLADAS

El Decreto 131 del 29 de marzo del 2017, suscrito por el señor Alcalde Mayor de Bogotá, **ENRIQUE PEÑALOSA LONDOÑO** y el Secretario de Movilidad, **JUAN PABLO BOCAREJO SUESCÚN**, por el cual disminuyó el número mensual de pasajes con subsidio de transporte asignados a favor de personas con discapacidad, fijadas en el Acuerdo Distrital 484 de 2011, a veinticinco (25) viajes, violó las siguientes normas:

- **CONSTITUCIONALES:** Artículos 1, 2, 13,29, 49, 87, 93, 334.
- **LEGALES:**
 1. Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en Colombia mediante la Ley 1346 de 2009, en especial el artículo 4 NUMERAL 3, 9 y 20 de la misma ley norma que hace parte del bloque de constitucionalidad.
 2. Numeral 9 artículo 3 de la Ley 105 de 1993.
 3. Ley 361 de 1997
 4. Ley 1618 del 2013, especialmente lo dispuesto en el artículo 14.
 5. Decreto 470 de 2007, en especial el artículo 12.
 6. Literal g) artículo 3 del Acuerdo 624 del 2015.
 7. Acuerdo distrital de Bogotá 505 articulo 4.

IV. CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

CONSIDERACIONES GENERALES

Todas las causales de anulación en que incurre el acto administrativo demandado, y que más adelante serán objeto de explicación, tienen un fundamento general común en disposiciones constitucionales, razón por la cual, antes de entrar a desarrollar cada una de las mismas, es pertinente recordar que la base constitucional sobre el cual está soportado el Estado Social de derecho es el principio de dignidad humana, para el cual el hombre debe ser catalogado como un fin en sí mismo. De manera que conforme al artículo 2 de la Constitución Política se establece que no solo los poderes públicos deberán ejercer sus funciones en los términos señalados en la Constitución y la Ley, sino que además deberán tomar acciones que promuevan la Tutela efectiva de los derechos.

La consolidación de un Estado Social de Derecho (Art. 1 C.P), implica dentro de nuestro ordenamiento jurídico una tutela efectiva de los derechos, pues la administración ya no está llamada a "no" reprimir o limitar libertades, sino a procurar la eficaz, efectiva y proporcional protección, a lograr el cumplimiento de obligaciones positivas que hagan efectiva la Tutela efectiva de los derechos, en criterios de igualdad material.

1. FALSA MOTIVACIÓN

El Decreto 131 del 29 de marzo del 2017, obedeció a una FALSA MOTIVACIÓN, por parte del Alcalde Mayor de Bogotá, **ENRIQUE PEÑALOSA LONDOÑO** y el Secretario de Movilidad, **JUAN PABLO BOCAREJO SUESCÚN**, al disminuir el número mensual de pasajes con subsidio de transporte asignados a favor de personas con discapacidad, fijadas en el Acuerdo Distrital 484 de 2011, sustentado en garantizar la sostenibilidad financiera, pues no existe un nexo de causalidad adecuada entre dicha decisión y el equilibrio financiero del Sistema Integrado de Transporte Público, toda vez que la decisión se tomó conforme a los hábitos de viaje o desplazamiento de las personas en condición de discapacidad¹ y no frente a los ingresos destinados para el subsidio, que concluyeran que con dicho subsidio se comprometiera la sostenibilidad financiera del Sistema Integrado de Transporte Público.

A pesar que el Decreto 131 del 29 de marzo del 2017, motivó la decisión de bajar el número de pasajes para personas con discapacidad, fijadas en el Acuerdo Distrital 484 de 2011, en medidas tendientes a garantizar la sostenibilidad financiera del Sistema Integrado de Transporte Público en el Distrito Capital, desconoce los siguientes presupuestos:

- a. Que de acuerdo con lo dispuesto en el **artículo 3 del Acuerdo 484 del 2011**, la financiación del subsidio previsto, se efectuaba con recursos del Presupuesto de la Administración Central del Distrito Capital; lo cual tal como lo reglamentó el **Decreto Distrital 429 de 2012**, en su artículo 11, el procedimiento institucional para la operación del subsidio, establece que "La Secretaría Distrital de Hacienda situará los recursos de cada bimestre del subsidio en Transmilenio S.A., correspondientes a una sexta parte del total presupuestado para cada vigencia fiscal".
- b. Así que, el sistema de financiación de los subsidios no tienen relación con el sistema tarifario de transporte público, pues a pesar que incida en el monto de la tarifa su financiación no se garantiza con recursos del Sistema Integrado de Transporte Público, toda vez que su fuente es independiente a los ingresos corrientes del SITP, y no está

¹ De acuerdo con informe presentado el día 26 de abril del 2017, con radicado S-2017-64008, por la Alcaldía Mayor de Bogotá, en cabeza de la Secretaría de Movilidad y de Planeación de Bogotá.

demostrado que perjudique con dicha medida a los usuarios del servicio, ni que se encuentre comprometida a sostenibilidad financiera del sistema a causa del subsidio otorgado mediante el Acuerdo 484 del 2011.

- c. Que si bien la determinación del sistema tarifario del sistema Integrado de Transporte Público le corresponde al Distrito, no le compete la fijación de los subsidios, pues dicha competencia se encuentra asignada en este caso al Consejo Distrital, tal como dispone el numeral 9 del artículo 3 de la Ley 105 de 1993, y cuya reglamentación no puede desconocer dicho acuerdo, y mucho menos derechos, principios y valores de mayor sustantividad soportadas en normas de carácter superior. Y es que la misma Constitución Política en el párrafo de su artículo 334, determina que está prohibido a cualquier autoridad, bien administrativa, legislativa o judicial, invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar los derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su protección efectiva. Recuérdese que existe una clara prohibición de retrocesos respecto de este tipo de derechos, dado que existe un mandato de progresividad, en el que a las autoridades se le exige claramente demostrar imperiosamente las razones que hacen necesario tal desconocimiento, lo que no se puede soportar en una vaga y genérica referencia a la sostenibilidad financiera, sino que debe demostrarse que producto del otorgamiento del subsidio se compromete seriamente la sostenibilidad financiera de Transporte Público, situación que se desconoció con el Decreto 131 del 29 de marzo del 2017.

Además es claro que la misma Constitución y la Ley, ha querido proteger a este grupo de personas, con medios que determinen una igualdad real (artículo 13 C.P.), bajo criterios de accesibilidad, así la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en Colombia mediante la Ley 1346 de 2009, en especial lo dispuesto en sus artículos 9 y 20, obligan a los Estados parte adoptar medidas efectivas para asegurar que las personas con discapacidad gocen de una movilidad personal con la mayor independencia posible, con medidas de financiación que correspondan a un costo asequible.

De esta forma, es claro que no existe una clara relación entre la estabilidad financiera del Sistema Integrado de transporte Público y el retroceso en el reconocimiento de derechos de las personas con discapacidad.

- d. Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en Colombia mediante la Ley 1346 de 2009, claramente promulga por criterios de justicia e igualdad material frente a personas con discapacidad, y exige a los Estados partes medidas efectivas para garantizar a dichas personas para facilitar su movilidad personal en la forma a un costo asequible.
- e. Así mismo, el numeral b del artículo 12 del Decreto 470 del 2012 (Política Pública Distrital de Discapacidad), dispone que debe facilitare la creación de tarifas diferenciales o acciones afirmativas económicas en el transporte para las personas con discapacidad y sus familias, que pudiendo acceder al mundo del trabajo presentan barreras de movilidad y sostenimiento económico, considerando igualmente que las condiciones que caracterizan su vinculación no satisfacen las necesidades básicas a partir del ingreso.
- f. Que el estudio presentado el día 26 de abril del 2017, con radicado S-2017-64008, por la Alcaldía Mayor de Bogotá, en cabeza de la Secretaría de Movilidad y de Planeación de Bogotá, referente a la justificación de la expedición del Decreto 131 del 29 de marzo del 2017, no tuvo en cuenta motivos de sostenibilidad fiscal sino de criterios de hábitos de viaje, el cual no discrimina en qué lugares se realizó la encuesta, ni los parámetros en que fue realizada la misma, pues desconoce no solo el hecho las diferentes condiciones de discapacidad, y la necesidad de las mismas, situación que sin duda vulnera los derechos de personas con discapacidad.

- g. Que la convención de las naciones unidas, sobre las personas con discapacidad, incorporada a la legislación nacional mediante la ley 1346 de 2009, consagra en el artículo 4 numeral 3 sobre las obligaciones, "3. En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan" y a nivel local en el caso de Bogotá, el estado debe garantizar lo consagrado en la norma de superior jerarquía, la consulta a las personas con discapacidad a través de las organizaciones que la representan o por lo menos en el escenario de consulta local el cual es El Consejo Distrital de Discapacidad, el cual está contemplado en el Acuerdo 505 de Diciembre 5 de 2012 artículo 4 del siguiente tenor, "EL Consejo Distrital de Discapacidad CDD; es la instancia consultiva, de asesoría y gestión del Sistema Distrital de Discapacidad para la coordinación, planificación, concertación, adopción y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la discapacidad en el Distrito Capital". El señor Alcalde no realizó consulta alguna a la población con discapacidad del Distrito y mucho menos lo hizo al Consejo Distrital de Discapacidad, donde el señor Peñalosa Londoño, preside este órgano Consultivo.

2. DESVIACIÓN DEL PODER

El Decreto 131 del 29 de marzo del 2017, obedeció a una falsa motivación, por parte del Alcalde Mayor de Bogotá, **ENRIQUE PEÑALOSA LONDOÑO** y el Secretario de Movilidad, **JUAN PABLO BOCAREJO SUESCÚN**, al disminuir el número mensual de pasajes con subsidio de transporte asignados a favor de personas con discapacidad, fijadas en el Acuerdo Distrital 484 de 2011, pues la única finalidad fue desconocer los derechos de las personas en condición de discapacidad, no la de garantizar la progresividad y sostenibilidad financiera del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá, la cual no tiene ninguna relación directa que razonablemente justifique tal medida.

Por lo anterior, Decreto 131 del 29 de marzo del 2017, debe ser retirado del mundo jurídico, toda vez que la presunción de validez que la cobija es fruto de una desviación del poder.

3. HABERSE EXPEDIDO SIN COMPETENCIA Y CON DESVIACIÓN DE LAS ATRIBUCIONES PROPIAS DE QUIEN LO PROFIRIÓ:

Que si bien la determinación del sistema tarifario del sistema Integrado de Transporte Público le corresponde al Distrito, no le compete la fijación de los subsidios, pues dicha competencia se encuentra asignada en este caso al Consejo Distrital, tal como dispone el numeral 9 del artículo 3 de la Ley 105 de 1993, y cuya reglamentación no puede desconocer dicho acuerdo, y mucho menos derechos, principios y valores de mayor sustantividad soportadas en normas de carácter superior.

No es valedero el hecho de que se diga que el subsidio no se disminuyó sino que se ajustó, puesto que el beneficio del subsidio a pesar de que el Acuerdo 484 de 2011 determina que la asignación máxima es hasta cincuenta (50) viajes mensuales, y que ahora son solo veinticinco (25) en virtud del Decreto 131 del 29 de marzo del 2017, pues a pesar de su reglamentación, la misma desconoce el hecho que frente a derechos de carácter social no puede existir regresividad injustificada, pues la estabilidad financiera del SITP, no está claramente justificada en dicho acto administrativo ni en su motivación, y su simple invocación no puede ser motivo suficiente para desconocer caros derechos e interés de personas que merecen un trato especial y protección reforzada, mediante acciones positivas que supongan la concreción de la tutela efectiva de sus derechos y el reconocimiento de su dignidad, en el marco de un Estado Social de Derecho.

PRUEBAS

A.DOCUMENTALES

- 1. Copia del Decreto 131 del 29 de marzo del 2017.
- 2. Copia del informe presentado el día 26 de abril del 2017, con radicado S-2017-64008, por la Alcaldía Mayor de Bogotá, en cabeza de la Secretaría de Movilidad y de Planeación de Bogotá.

COMPETENCIA

Es usted competente para conocer del presente proceso en razón de la naturaleza del asunto, las pretensiones y domicilio del demandante.

ANEXOS DE LA DEMANDA

- 1. Poder para actuar.
- 2. Copia de la demanda y sus anexos para traslado a la demandada.
- 3. Copia de la demanda y sus anexos para el archivo del juzgado.
- 4. Copia de la demanda y sus anexos para la Agencia Jurídica del Estado.

NOTIFICACIONES

La **ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.**, en las oficinas del representante legal, el señor **ENRIQUE PEÑALOSA LONDOÑO**, quien lo sea o haga sus veces, o por el apoderado especial que para tal efecto se designe en el momento de la notificación, en la Cra. 8 No. 10 - 65, en la ciudad de Bogotá D.C. Según lo establecido en el artículo 197, capítulo VII (Notificaciones) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, LA **ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C** habilita el siguiente Correo electrónico: exclusivamente para notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@alcaldiabogota.gov.co

La **SECRETARIA DE MOVILIDAD**, en las oficinas del representante legal, el señor **JUAN PABLO BOCAREJO SUESCÚN** quien lo sea o haga sus veces, o por el apoderado especial que para tal efecto se designe en el momento de la notificación, en la Calle 13 No. 37 - 35 , en la ciudad de Bogotá D.C. Según lo establecido en el artículo 197, capítulo VII (Notificaciones) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, LA **SECRETARIA DE MOVILIDAD**, habilita el siguiente Correo electrónico: exclusivamente para notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@alcaldiabogota.gov.co

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO- Calle 7 No. 75 - 76 Piso 2 y 3.
Buzonjudicial@defensajuridica.gov.co

El demandante: Calle 19 # 8 - 81 Oficina 505 Edificio Ciudad de Lima.
Mail: periodicoproclama@gmail.com
Celular: 3142780014

El suscrito apoderado judicial: En la Transversal 1 Bis # 25 - 40 sur de la ciudad.
Mail: ferlancheros@hotmail.com
Celular: 3003642331.

Cordialmente,

Fach la foto
Fernando Lancheros Beltrán.
C.C. 79.456.486 de Bogotá
TP. 67.762 del C.S DE LA J.

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS
ADMINISTRATIVOS DE BOGOTÁ
DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL
El documento fue presentado personalmente por
Fernando Lancheros Beltrán
Quien se identificó C.C No. 79.456.486
T.P No. 67762 Bogotá D.C. 27 JUN 2017
Responsable Centro de Servicios *[Signature]*